

El estado de las cosas

ANÁLISIS

Juan Carlos Jobet



HAY HITOS —FRASES, IMÁGENES, SUCESOS—QUE CRISTALIZAN EL ESTADO DE LAS COSAS EN CIERTO MOMENTO. Se convierten en símbolo, en la representación concreta del tiempo en que ocurren, porque concentran en un solo foco de atención los rasgos que marcan o definen ese tiempo.

Hay algo de eso en el caso de los viajes al extranjero de los funcionarios públicos con licencia médica que destapó la Contraloría (vayan a los autores del informe felicitaciones por mostrar que la función pública bien ejercida sí hace una diferencia).

Este episodio desnuda muchas cosas. Cómo se ha ido normalizando la frivolidad (funcionarios que montan un fraude para irse de viaje al extranjero, ¿pero en qué estaban pensando?), la ineficiencia con que funcionan los municipios (ahí están buena parte de los 25 mil pillos), la urgencia de reformar el estatuto administrativo. Pero hay dos que parecen ser las más estructurales.

El caso muestra, primero, el descuido que se ha instalado a la hora de cumplir las reglas, funcionar en el espacio público y cuidar los bienes comunes. El fraude de las fundaciones, la evasión en el transporte, la destrucción del espacio público, la toma de barrios por mafias, son solo algunos ejemplos. Es como si en alguna parte se hubiera arraigado la idea de que las cosas de todos están ahí para disponer de ellas sin ninguna restricción.

Lo que parecen a simple vista comportamientos aislados se están enraizando como una forma legítima de convivir: si los jóvenes pueden subir con la frente en alto y zapatillas nuevas a una micro sin pagar, entonces no nos sorprendamos después. En esas pequeñas transgresiones y desparpajos de chico listo está el germen de una cultura de deshonestidad y facilismo que después se paga caro.

Y aunque, claro, el costo de esa cultura es mucho más que plata, solo las licencias médicas excesivas le cuestan al menguado fisco chileno unos 800 millones de dólares al año. Los números gruesos: 900 mil funcionarios públicos, que ganan 55 dólares al día en promedio y tienen 16 días de licencia al año más que los del sector privado (26 vs. 10). Basta multiplicar: 800 millones, o casi 60 mil

funcionarios menos para hacer el mismo trabajo. (El informe de Contraloría sugiere quiénes podrían ser los primeros 25 mil que sobran).

El segundo rasgo de estos tiempos que este caso muestra es cuánto se ha establecido la lógica identitaria: más importante que el comportamiento de un individuo es su pertenencia a un grupo, y esa pertenencia es usada como fuente de verdad o autoridad por encima de cualquier otra consideración.

Entre los funcionarios públicos, esa pertenencia se da

¿Qué ha hecho el Colegio Médico para condenar a los miembros de su gremio que contribuyen a robar recursos que deberían ir a atender a los enfermos reales? ¿Qué medidas ha tomado para sancionar a quienes han hecho del fraude un oficio?"

en la ANEF, que hizo una declaración que condena el mal uso de las licencias (no hacerlo hubiera sido imprevisible), pero luego llama a no instrumentalizar el informe. ¿Lo dice en serio? ¿Qué quiere decir con eso? ¿Que no podemos ver lo que el informe denuncia, reaccionar con indignación, buscar responsables y solucionar el problema?

Si a la ANEF le preocupa poner en valor los principios que deben regir una buena función pública y cuidar a esa mayoría silenciosa de funcionarios que hace su trabajo de forma honesta, debería salir a la calle con pancartas, como ha hecho tantas veces por mucho menos, y expulsar a los culpables de su agrupación.

Si al gremio de verdad le importa cómo funciona el Estado, ¿dónde está su empatía con los ciudadanos que

reciben muy pobres servicios en salud (para no hablar de seguridad, vivienda o educación), en parte por mala gestión, a la que poco ayuda que sus responsables se vayan de vacaciones amparados en un fraude, y en parte por falta de recursos, que esos mismos funcionarios defraudan?

Y el Colegio Médico, que no digamos es tímido a la hora de sacar la voz cuando estima —según sus particulares coordenadas de lo que está bien o mal— que las cosas no se hacen como corresponde, que atacó sin cesar la hoy reconocida gestión del presidente Piñera durante la pandemia, ¿qué ha hecho el Colegio Médico para condenar a los miembros de su gremio que contribuyen a robar recursos que deberían ir a atender a los enfermos reales? ¿Qué medidas ha tomado para sancionar a quienes han hecho del fraude un oficio, a pesar de que por lo delicado de los asuntos con que lidian —la vida humana nada menos— deberían estar sujetos a un estándar más alto que el promedio? ¿Qué va a hacer el colegio para cuidar la reputación de la inmensa mayoría de sus miembros que se dedican a aliviar el dolor, dar consuelo, salvar vidas?

Me temo que el gremio, como la ANEF, hará poco más que declaraciones vacías.

La reacción de estos gremios es reflejo de la lógica identitaria que opera en otros ámbitos. La vemos a ratos en los partidos políticos, primó en la Convención, y marca el actuar de agrupaciones de distinta naturaleza. Según esta lógica, la pertenencia al grupo se impone a cualquier criterio externo, incluso al más básico sentido de lo correcto. En vez de indignarse con los que abusaron, se protege a la tribu. Como si condenar el engaño de unos pocos fuera una traición al colectivo. Es la paradoja —para no decir hipocresía— de los tiempos que corren: se reivindican causas nobles en el discurso, pero se renuncia al juicio moral de fondo cuando el infractor lleva el mismo uniforme.

Es cierto. El panorama visto así no es muy alentador. Pero si no somos capaces de ver estos rasgos que parecen inundar el devenir del país, será difícil cambiar el estado de las cosas.